



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, nueve (09) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

**Medio de Control:** Ejecutivo  
**Demandante** Miguel Ángel Rondón Rico  
**Demandado:** Municipio de Ventaquemada.  
**Radicación:** 15001 3333 006 **2015 00067 00**

El expediente de la referencia ingresó al Despacho, una vez vencido el término de traslado de la liquidación aportada por la parte ejecutante (fl. 185-194), con el fin de establecer su aprobación o modificación, según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 446 del CGP.

### ANTECEDENTES

1. Con auto de 16 de junio de 2015, se libró mandamiento de pago a favor del señor Miguel Ángel Rondón Rico, en los siguientes términos:
  - I. *“Por concepto del cumplimiento íntegro de la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2009 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja y Confirmada Parcialmente mediante fallo de 17 de abril de 2012 por el Tribunal Administrativo de Boyacá.*
  - II. *Por los intereses moratorios causados desde el 27 de abril de 2012, día siguiente a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, y la fecha en que se realice el pago de la obligación.”*
2. Con sentencia de 22 de septiembre de 2015 (fl. 74-80), se ordenó seguir adelante con la ejecución en la forma dispuesta en el auto que libró mandamiento de pago.
3. El 24 de junio de 2016, las partes acordaron ... *“Que el municipio de Ventaquemada en calidad de deudor dentro del proceso ejecutivo ya referido se obliga a pagar al señor MIGUEL ÁNGEL RONDÓN RICO por concepto de capital, intereses de mora, costas y agencias en derecho la suma de TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$350.000.000.00)”,* dinero que se pagaría en tres cuotas, de las cuales la última debía cancelarse el 12 de marzo de 2018, plazo en que, según la cláusula tercera del acuerdo, la parte ejecutante también cancelaría los aportes a salud y pensión. (fls. 139-140)
4. Mediante providencia de 7 de diciembre de 2016, y con fundamento en la solicitud de las partes, el proceso fue suspendido hasta el 12 de marzo de

2018 (f. 168 y ss.) y se reanudó mediante auto de 12 de abril de dicho año (fl. 172).

5. Con memorial radicado el 11 de mayo de 2018, la parte ejecutante informó que el municipio de Ventaquemada pagó, en las fechas establecidas, las sumas de dinero pactadas, pero no cumplió con los aportes a salud y pensión (175).
6. La parte demandante presentó liquidación de crédito manifestando que tuvo en cuenta el acuerdo de pago de 24 de junio de 2016, en especial, la cláusula tercera, parágrafo de las cláusulas séptima y octava, en las cuales se indicó que en el evento que el municipio de Ventaquemada incumpliera lo pactado, el acreedor podría continuar con el trámite de la ejecución por lo adeudado, y las sumas pagadas por concepto de alguna de las cuotas se imputarían a intereses, conforme lo establece el artículo 1653 del Código Civil
7. Por consiguiente, atendiendo a que el ente territorial no realizó los aportes a salud y a pensión, calculó el capital debidamente indexado desde el 5 de octubre de 2001 hasta el 15 de julio de 2012, los intereses moratorios sobre esa suma, causados desde el 15 de julio de 2012 y hasta el 31 de agosto de 2018, y descontó los pagos parciales efectuados por el municipio, imputándolos primero a intereses y luego a capital. Dichas operaciones arrojaron los montos que a continuación se indican:

<i>"INTERESES LIQUIDADOS</i>	<i>\$317.966.833</i>
<i>INTERESES CANCELADOS</i>	<i>\$305.804.623</i>
<i>INTERESES MORATORIOS A LA FECHA</i>	<i>\$12.162.210</i>
<i>ABONO A CAPITAL</i>	<i>\$44.195.377</i>
<i>SALDO POR CANCELAR (Capital + intereses)</i>	<i>\$140.348.752"</i>

8. De esta liquidación se corrió traslado a la parte ejecutada, según lo señalado en el numeral 2 del artículo 446 del CGP, entre el 13 y el 17 septiembre de 2018 (fl. 196), término durante el cual la accionada guardó silencio.
9. El 05 de septiembre del año anterior, el municipio de Ventaquemada informó que solicitó a Porvenir S. A., Fondo donde se encuentra afiliado el accionante, la liquidación de los aportes durante el tiempo comprendido entre el 08 de octubre de 2001 al 18 de mayo de 2012 (fl. 195)

### CONSIDERACIONES

Para comenzar, el Despacho debe indicar que la liquidación del crédito se rige por lo dispuesto en el mandamiento de pago y en la sentencia que dispuso seguir adelante con la ejecución. En este entendido, valga señalar que la demanda no hizo ninguna

solicitud con relación a la imputación de pagos contenida en el artículo 1653 del Código Civil, luego, este aspecto no fue objeto de pronunciamiento en dichas providencias.

Además, debe recordarse que mediante auto de 18 de agosto de 2016, el Juzgado impartió aprobación al acuerdo de pago celebrado entre las partes y negó la suspensión del proceso. No obstante, a través de reposición, el apoderado de la parte ejecutante alegó que no se trataba de un acuerdo conciliatorio, y que lo único pretendido era otorgar al accionado un tiempo prudencial para el pago del crédito.

De conformidad con lo expuesto por la parte ejecutante, mediante providencia de 29 de septiembre de 2016, el Despacho revocó tal aprobación y, con auto de 7 de septiembre del mismo año, concedió la suspensión del proceso, circunstancia de la que se desprende que dicho acuerdo no tuvo efecto alguno dentro del presente proceso ejecutivo, donde el título está constituido exclusivamente por la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2009, confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 17 de abril de 2012.

Ahora bien, atendiendo lo manifestado por la parte ejecutante, se tiene que el municipio de Ventaquemada le canceló la suma de \$350.000.000 correspondiente al capital, los intereses de mora y las costas y agencias en derecho, quedando pendiente, únicamente, efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social, de tal suerte que la liquidación presentada no se ajustó a lo dispuesto al momento de seguir adelante con la ejecución, toda vez que los recursos destinados al Sistema de Seguridad Social no pueden ingresar al patrimonio del señor Miguel Ángel Rondón Rico, y por tanto, tampoco generar intereses a su favor.

De conformidad con lo dicho, es preciso señalar que el inciso quinto del artículo 48 Superior instituye que no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las Instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella; asimismo, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en establecer que dichos recursos, son contribuciones parafiscales, por tanto tienen naturaleza pública y una destinación específica, al respecto, en la sentencia C-422 de 2016<sup>1</sup>, señaló:

*“Respecto al carácter de contribuciones parafiscales de destinación específica que tienen los recursos del sistema de seguridad social en pensiones<sup>2</sup>, la sentencia C-178 de 2016 rememoró que la jurisprudencia constitucional se ha ocupado de definir el alcance y explicar la validez constitucional de las contribuciones parafiscales, las cuales se basan en los principios de solidaridad e igualdad, y en los mandatos que ordenan la promoción de ciertas actividades o sectores de la economía. Se trata de pagos obligatorios al surgir de la potestad fiscal del Estado, además que solo obligan a un grupo y se invierten en el mismo. También deben respetar el principio de legalidad, es*

<sup>1</sup> M.P. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

<sup>2</sup> Sentencias C-663 de 2009 y C-155 de 2004.

*decir, la definición precisa de los sujetos activos y pasivos, hechos generadores, bases gravables y tarifas...”*

En desarrollo del derecho a la seguridad social, el Congreso de la República expidió la Ley 100 de 1993 que creó el Sistema de Seguridad Social Integral y estableció la obligatoriedad de cotizar a los regímenes de sistema general de pensiones (artículo 17) y de afiliarse al régimen contributivo en salud de las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago (artículo 157), de manera que las cotizaciones destinadas a pensión y a salud son administradas, respectivamente, por el fondo de pensiones y la empresa prestadora de salud a las que se encuentre afiliado el cotizante.

En ese orden, en el asunto que nos ocupa, los salarios y prestaciones sociales adeudados al señor Miguel Ángel Rondón ya fueron sufragados, quedando pendiente la obligación de realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, de los cuales el beneficiario no es titular, y por consiguiente, no generan ningún tipo de beneficio económico a su favor, en la medida que dichos dineros, tal como lo aseguró el apoderado de la parte demandante, al momento de presentar la liquidación del crédito, deben ser consignados a la administradora de pensiones y a la EPS a las que se encuentre afiliado el actor, conforme lo establece la citada Ley 100 de 1993.

Así las cosas, al considerar que la parte ejecutante no observó los parámetros establecidos al momento de seguir adelante con la ejecución, el Despacho no aprobará la liquidación presentada y entrará a modificarla teniendo en cuenta lo siguiente:

A fin de determinar los montos que por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral el municipio de Ventaquemada debe consignar, es preciso señalar que el artículo 20 de la referida Ley 100 establece el monto de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, así:

***“ARTÍCULO 20. MONTO DE LAS COTIZACIONES. <Ver Notas del Editor>***  
*<Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> La tasa de cotización continuará en el 13.5%\* del ingreso base de cotización.*

*(...)*

*A partir del 1o. de enero del año 2004 la cotización se incrementará en un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización. Adicionalmente, a partir del 1o. de enero del año 2005 la cotización se incrementará en medio por ciento (0.5%) y otro medio punto (0.5%) en el año 2006. A partir del 1o. de enero del año 2008, el Gobierno Nacional podrá incrementar en un (1%) punto adicional la cotización por una sola vez, siempre y cuando el crecimiento del*

*producto interno bruto sea igual o superior al 4% en promedio durante los dos (2) años anteriores.*

*(...)*

*Los empleadores pagarán el 75% de la cotización total y los trabajadores el 25% restante.*

*En ningún caso en el régimen de prima media se podrán utilizar recursos de las reservas de pensión de vejez, para gastos administrativos u otros fines distintos.”*

Por su parte el artículo 204 *ibídem* regula el monto y distribución de las cotizaciones al régimen contributivo en salud, estableciendo que corresponde al 12.5% del ingreso o salario base de cotización, del cual el 8,5% corresponde al empleador y el 4% está a cargo del empleado.

Por consiguiente, el Juzgado con base en la certificación visible a folio 36 del expediente, efectuó a la asignación de cada año el descuento de los porcentajes correspondientes a las cotizaciones por conceptos de salud y pensión ya mencionados, siendo importante aclarar que este será asumido en su totalidad por el empleador, es decir, por el municipio de Ventaquemada, por cuanto, según lo manifestado por la parte accionante al pagar los salarios y prestaciones a favor del señor Rondón Rico, se realizaron los descuentos a cargo del trabajador.

De igual modo, al considerar que las cotizaciones se generaron mensualmente, a fin de evitar la devaluación monetaria, las sumas resultantes fueron indexadas mes a mes, teniendo como índice inicial el vigente a la fecha en que cada pago se causó, y como final el certificado para el mes de marzo de la presente anualidad, sin que a juicio de este Despacho sea viable la cancelación de intereses moratorios habida cuenta que no se trata de un incumplimiento, pues durante el tiempo transcurrido entre el despido y el reintegro ordenado en la sentencia base de recaudo, el ente territorial no tenía la obligación de pagar aportes al Sistema de Seguridad Social. En consecuencia, según la liquidación anexa, las cotizaciones indexadas que debe pagar el municipio accionando, corresponden a los siguientes valores:

APORTES INDEXADOS		
AÑO	SALUD	PENSIÓN
2001	\$506.465	\$ 569.773
2002	\$1.926.917	\$ 2.167.781
2003	\$1.931.630	\$ 2.173.083
2004	\$1.959.107	\$ 2.203.995
2005	\$1.975.805	\$ 2.469.756
2006	\$2.007.451	\$ 2.509.314

2007	\$2.018.173	\$ 2.522.717
2008	\$2.002.898	\$ 2.670.531
2009	\$2.059.406	\$ 2.745.874
2010	\$2.089.001	\$ 2.785.335
2011	\$2.085.025	\$ 2.780.033
2012	\$1.168.090	\$ 1.557.453
<b>TOTAL</b>	<b>\$21.729.967</b>	<b>\$ 27.155.645</b>

De conformidad con lo antes expuesto, se concluye que a la fecha, el municipio de Ventaquemada tiene la obligación de aportar al Fondo de Pensiones al cual se encuentre afiliado el accionante, la suma de **veintiún millones setecientos veintinueve mil novecientos sesenta y siete pesos (\$21.729.967)**, y a la empresa prestadora de salud a la que esté vinculado, el valor de **veintisiete millones ciento cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco pesos (\$27.155.645)**

Por lo brevemente expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Tunja,

**RESUELVE:**

**PRIMERO.- Modificar la liquidación** presentada por la parte demandante obrante a folios185 y ss. del expediente y, en su lugar, **aprobar la liquidación de crédito** de las sumas de **veintiún millones setecientos veintinueve mil novecientos sesenta y siete pesos (\$21.729.967)** por concepto de cotizaciones a salud, y **veintisiete millones ciento cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco pesos (\$27.155.645)** a título de a portes a pensión, que deberán pagarse al fondo administrador de pensiones y a la empresa prestadora de salud, respectivamente, a las cuales se encuentre afiliado el señor Miguel Ángel Rondón Rico.

**Notifíquese y cúmplase,**

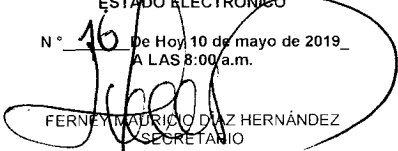
  
**ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ**  
**Juez**

<sup>3</sup>CZ

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD  
DEL CIRCUITO DE TUNJA

NOTIFICACIÓN POR ESTADO  
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR  
ESTADO ELECTRÓNICO

N° 16 De Hoy 10 de mayo de 2019  
A LAS 8:00 a.m.

  
**FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ**  
**SECRETARIO**

<sup>3</sup> Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 10 de mayo de 2019, en la página web [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co). Ferny Mauricio Díaz Hernández - Secretario